

Señor:

**JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE CALI V.
(O.R.)
E.S.D.**

- ❖ **Acción:** MEDIO DE CONTROL-REPARACIÓN DIRECTA.
- ❖ **Accionantes:** CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ, YOLANDA DE JESUS ORTIZ ORTIZ, MARIA DE LOS ANGELES ORREGO RODRIGUEZ, MARÍA ISABEL ORREGO VALDEZ, MARIA ALEJANDRA VALDEZ PATIÑO, MONICA FERNANDA LONDOÑO ORTIZ, ARBEY CUELLAR URIBE.
- ❖ **ACCIONADOS:** LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL.

JULIO SOLANO ZAMBRANO, mayor y vecino de Popayán Cauca, con domicilio profesional conocidos en la Carrera 10 No.7-73, de la ciudad de Popayán, cel.: 312-2882324-3104489860, E-MAIL solano2012zambrano@hotmail.com. identificado con Cédula de Ciudadanía Número 10.526.490 expedida en Popayán, Cauca, Tarjeta Profesional de abogado número 113.155 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como mandatario judicial de los de los actores legitimados en la causa por activa, que relacionaré en el acápite de **partes integrantes** conforme los memoriales poderes que me conferido, respetuosamente me permito INSTAURAR demanda administrativa **a través del medio de control de REPARACIÓN DIRECTA contra: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representadas legalmente por el señor Director Ejecutivo Nacional de Administración Judicial, El Fiscal General de la Nación, o quienes hagan sus veces al momento de la notificación, tendiente a que se declaren administrativamente responsables y en consecuencia se les condene a indemnizar y/o compensar a cada uno de los actores por los daños antijurídicos tanto materiales como inmateriales causados a ellos por la privación injusta de la libertad de que fue víctima material **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.112.465.527 expedida en Cali Valle del Cauca, por la privación injusta de su libertad de que fue objeto en proceso con C.U.I.N° **7683460001241201200225**, promovido por la Fiscalía General de la Nación a través de su delegado seccional 47 de Tuluá Valle del Cauca, siendo de conocimiento el Juzgado Único de Menores del circuito judicial Tuluá Valle del Cauca, en proceso de investigación de responsabilidad penal que culmino con sentencia de Preclusión a favor del precitado ciudadano, la cual quedo ejecutoriada el día 15 de marzo de 2013.

I. INTEGRACIÓN DE LAS PARTES.

La parte demandante está integrada por:1-**CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ** identificado con cedula d ciudadanía N° 1.112.465.527 expedida en Cali Valle, en su condición de

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

afectado material directo; 2-por sus dos hijas menores de edad **MARIA DE LOS ANGELES ORREGO RODRIGUEZ, y MARÍA ISABEL ORREGO VALDEZ**, (representadas por el padre biológico de las mismas); 3- **MARIA ALEJANDRA VALDEZ PATIÑO** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.143.963.540 expedida en Cali Valle en su condición de (compañera permanente de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**); 4- **YOLANDA DE JESUS ORTIZ ORTIZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 29.811.029 expedida en Sevilla Valle, en su condición de (madre consanguínea de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, quien actúa en su propio nombre y en representación de su hija menor 5- **LUISA FERNANDA ORREGO ORTIZ** identificada con T.I. N° 97.050.812.450; 6- **MONICA FERNANDA LONDOÑO ORTIZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 31.712.075 expedida en Cali Valle, en su condición de hermana consanguínea del afectado material directo; 7- **YOLANDA DE JESUS ORTIZ ORTIZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 29.811.029 expedida en Sevilla y 8- **LUISA FERNANDA ORREGO ORTIZ**, como herederas del causante **HILDEBRANDO ORREGO VELEZ**; 8- e igualmente, como heredera del causante **ANTONIO ORTIZ MUÑOZ** (abuelo materno de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**), 9- y **ARBEY CUELLAR URIBE** identificado con cedula de ciudadanía N° 94.937.570 de Andalucía Valle, (en su condición de cuñadode **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ** por ser el compañero permanente de **MONICA FERNANDA LONDOÑO** ésta a su vez hermana de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO**).

La parte demanda está integrada así:

LA NACION- RAMA JUDICIAL- FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

II-HECHOS:

1. Según escrito de acusación de la información legalmente obtenida se podría inferir que siendo las 3:30 de la tarde, del 3 de octubre de 2012, en la vía pública kilómetro 0, que de Andalucía conduce a Cerritos, el adolescente **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, fue sorprendido en compañía de otra persona adulta, en un vehículo tipo camioneta, color rojo de placas CEC-760, en la que se trasportaban 8 estopas que contenían sustancia de marihuana con un peso de 352.000 gramos. que de inmediato se hizo la incautación del EMP y se dio la aprehensión de tres personas adultas, y de este adolescente aquí referenciado, porque al parecer tenía participación en el ilícito, por lo que los policiales procedieron a realizar la retención de los mismos.

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

2. En audiencia Preliminar celebrada ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tuluá-Valle, siendo titular de ese despacho el Doctor **JHON EDINSON JARAMILLO MARIN**, decretó legal la captura, se legalizó la imputación fáctica y jurídica por la presunta infracción a la Ley penal, verbo rector transportar, como presunto coautor del ilícito contenido en el inciso 1 del artículo 376 de la Ley 599 de 2000, actuando como fiscal en turno de URI el Doctor **JUAN CARLOS GALLEJO ORTIZ**, fiscal seccional 28 de Tuluá-valle, quien hizo las correspondientes solicitudes de control de legalidad al procedimiento de captura, a los EMP incautados, imputación fáctica y jurídica por las conductas punibles de Tráfico, Fabricación o porte de estupefaciente, en concurso con Cohecho por Dar u Ofrecer, e imposición de medida de Seguridad privativa de la libertad, a la que accedió decretar el señor Juez de control de garantías, imponiendo la medida de internamiento en centro especializado, mediante oficio número 2202 del 4 de octubre de 2012, emanado del Juzgado 4 Penal Municipal Con Funciones de Control de Garantías, siendo internado en el Hogar Transitorio de (Agua Clara) de Tuluá-Valle, el día 8 de octubre de 2012.
3. Como quiera que las diligencias preliminares se enviaron ante el señor juez de menores mediante oficio 2307, adiada el 4 de octubre de 2012, suscrito por la Doctora **DIANA CAROLINA GUTIERREZ HERRERA**, secretaria del Juzgado cuarto penal municipal, y teniendo en cuenta que la orden del juez de menores fue de internar al adolescente en un centro especializado, mediante oficio 2393 de noviembre 02 de 2012, el señor juez de menores insiste que el doctor **GUILLERMO POLANIA ZAMORA**, en su calidad de defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Tuluá-valle, para que se le informe si efectivamente el menor fue trasladado a un centro Especializado adscrito a al "ICBF" Bienestar familiar de la regional de Cali, por cuanto, las condiciones locativas del hogar Santa Clara de Tuluá-Valle, no eran las más adecuadas para albergar a menores - adolescentes en dicho centro, por lo que mediante oficio número 3448, el defensor de familia doctor **GUILLERMO POLANIA ZAMORA**, en respuesta a los oficios 2393,2394,2494 de noviembre 02 de 2012, da a conocer que hasta esa fecha la Regional de Cali-Valle, no ha otorgado cupo en centro especializado del valle de Lili o Buen pastor de la ciudad de Cali-Valle, por lo que el adolescente debió permanecer privado de su libertad en condiciones indignas en el centro de paso de Agua Clara de Tuluá Valle.
4. Mediante oficio 2569 de noviembre 23 de 2012, el Juez de menores del Circuito Judicial de Tuluá-Valle con funciones de conocimiento, remite al adolescente **CRISTIHAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, al centro de formación juvenil ubicado en el kilometro 1 de Jamundí, Valle, donde posteriormente es internado en el centro especial para adolescentes Valle del Lili de Cali- Valle, lugar donde estuvo recluido hasta el día 13 de diciembre de 2012, y posteriormente, se le sustituyó el lugar de internación y fue internado en su residencia ubicada en la ciudad de Cali Valle.
5. Como quiera que el adolescente **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, estuvo privado de su libertad, internado en sitios de reclusión no adecuados a causa de la medida de internamiento decretada por el

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

"El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva".

Juzgado Cuarto Penal municipal con funciones de Control de Garantías de Tuluá- Valle, a petición del delegado Fiscal 28 seccional de Tuluá Valle, en turno de disponibilidad URI, se le vulneraron sus derechos fundamentales a una vida digna, de presunción de inocencia y de la libertad de libre locomoción, de ser separado de su familia, alterando sus condiciones de existencia, de recibir un afecto continuo de su familia perturbándose la integridad de su núcleo familiar, relación de amigos y de libre locomoción sin restricción alguna limitándose el ejercicio de la libertad siendo estos derechos fundamentales de libre disposición de todo ciudadano como persona humana libre, afectándose su libre desarrollo de la personalidad siendo unos derechos constitucionales protegido es en la Carta Superior, y en los Tratados y Convenios de Derechos humanos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, máximo que para ese entonces de la privación injusta de su libertad y que estuvo recluido en centro de internamiento era tan solo un adolescente, que no solamente afecto al adolescente mismo de ése entonces, causándole perjuicios materiales, e inmateriales y constitucionales al coartarle además su derecho fundamental tanto de la libertad como el derecho al trabajo, por cuanto era él, quién sostenía el hogar conformado con **MARIA ALEJANDRA VALDEZ PATIÑO**, con quien para esa fecha ya habían conformado una unión marital de hecho entre compañeros permanentes, y de cuya unión procrearon a **MARIA ISABEL ORREGO VALDEZ**, y teniendo bajo su custodia a **MARIA DE LOS ANGELES ORREGO RODRIGUEZ** también menor de edad, porque desde muy pequeña **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, asumió la custodia de la misma, a quien por parte de la madre de la misma, también adolescente para la fecha **LAURA PAULETTE RODRIGUEZ**, por ser el padre de la menor debió asumir la custodia de esta menor.

6. A causa de la privación injusta de la libertad solicitada por el Fiscal 28 seccional de Tuluá Valle y decretada por el operador del Juzgado Penal municipal con funciones de control de garantías de Tuluá Valle, se le ocasiono por ese hecho, daños materiales consistente en Lucro cesante durante el lapso de tiempo que permaneció privado de la libertad tanto en centro de paso para menores (Agua Clara) en TuluáValle, en centro de internamiento especializado Instituto Valle del Lili de Cali Valle, como en el lugar de su residencia durante 164 días que equivalen a 5 meses y 12 días .
7. Al haber estado procesado **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, imputado y acusado como infractor al artículo 376 Inciso 1 de la Ley 599/00, no solamente se le causó daños materiales durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, sino que también se le causó daño antijurídico por espacio de 35 semanas que equivalen 8.75 meses, que es el tiempo que el observatorio del SENA ha comprobado lo que tarda una persona que ha sido afectado con medida de aseguramiento de detención preventiva, en centro de internamiento bien sea en centro especializado o en el de lugar de residencia tardando en conseguir empleo o trabajo durante ese lapso de tiempo, constituyendo este hecho otro daño antijurídico denominado también como lucro cesante.

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

8. El hecho de que una persona humana se lo judicialice penalmente, y se le imponga una medida de seguridad o de aseguramiento en centro carcelario o de internamiento especializado o en el lugar de su domicilio, tal como aquí sucedió, afecta emocionalmente, anímica y físicamente, tanto a la persona privada de su libertad, como a todo su núcleo familiar más cercanos, parientes y amigos, causándoles daños inmateriales a todos ellos, porque esa situación, genera dolor, zozobra, angustia, desesperación, aflicción, congoja y tristeza, porque los afecta emocional y anímicamente, lo que se constituye en daños morales, que no estaban obligados a soportarlo. Y todo, por las decisiones ligeras, irrazonables y desproporcionadas, que toman los Jueces penales municipales, con funciones de control de garantías, por solicitud exclusiva de los señores fiscales de turno, que por el solo hecho de que la policía judicial les trasmite unos informes de Policía e informes ejecutivos, por la presunta comisión de una conducta punible o una infracción a la Ley penal, sin investigar a fondo de su real y verdadera participación en el ilícito, lo privan de la libertad y después de haberle hecho pasar duros y amargos sufrimientos que afectan al mismo procesado y todo su núcleo familiar y parientes cercanos, llegan a la conclusión como del caso que nos ocupa, de no poder demostrarse haber participado en el hecho investigado, o que la conducta es atípica, como sucedió en este caso. Sin embargo, ese hecho causa un daño que se traduce en daño moral a todas estas personas, por lo que el Estado como en este caso, la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA RAMA JUDICIAL, ocasionó a través de sus operadores delegados fiscales y judiciales; y que después de someter al procesado a las diferentes etapas procesales, solo hasta la audiencia preparatoria se viene a restablecer el derecho a la libertad de libre locomoción, mas no en los daños materiales, daños a bienes constitucionales e inmateriales (Morales) causados, tal como sucedió en el presente caso contra el señor **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ** y resultando afectados moralmente a todo su núcleo familiar, parientes consanguíneos y afines incluidos familiares y amigos como realmente sucedió a consecuencia de la privación injusta de este ciudadano Colombiano quien debió permanecer privado de su libertad aun en la etapa de adolescencia y posteriormente cuando adquirió su mayoría de edad a consecuencia de las peticiones del operador de la fiscalía General de la Nación, por intermedio de su delegado 28 seccional de Tuluá Valle y del operador de la rama judicial que en este caso fue el Juez 4 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Tuluá Valle.
9. **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, ES EL único HIJO VARON de la primera descendencia del hogar conformado entre la señora **Yolanda de Jesús Ortiz** y el señor **Hildebrando Orrego Vélez**, quien para la fecha de la privación de la libertad del primero prenombrado, este último se identificaba con la cedula de ciudadanía N° 14.997.653, el cual para la época de la privación de libertad de su hijo se encontraba delicado de salud, falleciendo el 01 del mes de junio de 2013, siendo precisamente **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ** la persona que suministraba la mayor parte del recurso económico para el sostenimiento de ese hogar del cual también hacía parte su señor **abuelo materno Antonio Ortiz**

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

Muñoz, quien se identificaba con al cedula de ciudadanía N° 2.642.773 quien falleció el día 11 del mes de mayo de 2014, persona ésta que desde que se desplazó desde el municipio del Tambo Cauca, vivió al lado de su hija y vio nacer, crecer, compartir con su nieto, el cual al igual que el padre del mismo, padeció sufrió, se acongojó, padeció tristeza y desolación por la privación injusta de la libertad de su nieto, único hijo varón de la primera descendencia y tercera descendencia de este núcleo familiar.

10. La relación familiar entre **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, con su padre **HILDEBRNADO ORREGO VELEZ**, con su abuelo **ANTONIO ORTIZ MUÑOZ**, era una relación muy fuerte emocionalmente, por lo que les causó mucha tristeza, angustia, sosiego, desesperación, no solo por el aporte económico que aquel les proveía, sino por esa relación cercana de parentesco lo que les causó mucho dolor ver a su hijo, a su nieto privado de la libertad por un hecho punible que él no cometió, Así mismo, con su compañera permanente **MARIA ALEJANDRA VALDES**, ésta que para la fecha de la privación injusta de su marital era también una adolescente con quien había procreado a su hija **MARIA ISABEL ORREGO VALDES**, compartiendo el mismo techo, teniendo la custodia de su menor hija **MARIA DE LOS ANGELES ORREGO ORTIZ**, todos ellos dependientes económica y afectiva de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**. Así mismo, existiendo una relación familiar y afectiva con sus hermanas **LUISA FERNANDA ORREGO ORTIZ**, también una preadolescente para la fecha de la privación de la libertad del primero precitado, lo mismo, con **MÓNICA FERNANDA LONDOÑO ORTIZ** con quien crecieron bajo un mismo techo, persona ésta quien conjuntamente con el compañero permanente de ésta, cuyo nombre es **ARBEY CUELLAR URIBE** identificado con la cédula de ciudadanía N°94.357.570, asumieron un papel protagónico para velar con el cubrimiento de los gastos económicos para el sostenimiento de todo ese núcleo familiar, pago de arrendamiento de la casa de habitación, porque ninguno tiene casa propia, incluidos los gastos de manutención del hogar y los se generaron cuando **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, estuvo recluido en centro de paso (Agua Clara) en Tuluá Valle, en Centro de internamiento especializado (Valle del Lili), y en su lugar de residencia donde posteriormente fue recluido este miembro de toda esta familia, en donde éste no tuvo la oportunidad de trabajo al estar recluido -privado de su libertad, el cual desde muy niño también tuvo que trabajar para ayudar el sostenimiento del hogar, porque siempre ha existido un vínculo afectivo de amigos, y de parentesco por ser cuñado de aquel, por lo que a todos ellos se les causó sufrimiento, dolor, congoja, aflicción, desesperación, angustia y tristeza por lo que estaba viviendo su pariente consanguíneo y por afinidad en relación al cuñado de **CRISTHIAN RONALDO**, generantes de daño moral en cada uno de éste núcleo familiar.
11. Como quiera que inicialmente **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, en los albores de la investigación estuvo asistido por un defensor público y que los resultados no se reflejaron prontamente en la solución del problema jurídico surgido por la privación injusta de la libertad de este adolescente de entonces, la señora **YOLANDA DE JESUS ORTIZ ORTIZ**, debió contratar a un abogado de confianza para que asumiera la

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

defensa técnica de su descendiente biológico; y para este caso contrató los servicios profesionales del abogado **Julio Solano Zambrano**, al cual le canceló la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS**, (\$5.000.000), para ejercer la defensa técnica de su único hijo varón, configurándose así, perjuicios materiales consistente en daño emergente.

12. A folio 25 de la correspondiente carpeta que reposa en el Juzgado Único de Menores del Circuito Judicial de Tuluá-Valle, con Funciones de conocimiento, el respectivo poder otorgado por la progenitora del adolescente de ese entonces, porque cuando cumplía la medida de internamiento impuesta por el Señor Juez Cuarto Penal Municipal con funciones de garantías, adquirió su mayoría de edad, por lo que se lo identifica para efectos administrativos y civiles con sus apellidos y nombre sin reserva legal como **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, tal como obra en su correspondiente certificado civil de nacimiento y en su respectiva cedula de ciudadanía con el número 1.112.465.527, expedida en Cali, Valle, al haber adquirido su mayoría de edad, nacido el 27 de noviembre de 1994, en la ciudad de Jamundí-Valle; poder otorgado al abogado **JULIO SOLANO ZAMBRANO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 10.526.490 de Popayán, con tarjeta profesional de abogado número 113.155 del C. S. de la J, quien asumió la defensa técnica del acriminado, como su defensor de confianza.
13. Dicha defensa fue asumida y reconocido personería para actuar a este defensor contractual a partir del 30 de noviembre del año 2012.
14. En audiencia preliminar realizada el 12 de diciembre de 2012, el mismo juzgado de control de garantías que le impuso la medida de internamiento en centro especializado a **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, le sustituyo la medida de seguridad preventiva de internamiento en centro especializado por la de lugar de residencia del mismo.
15. El día 6 de febrero de 2013, se materializó la audiencia de acusación, donde el adolescente no aceptó los cargos formulados por el delegado Fiscal Seccional 24 en Turno de URI, por la presunta contravención penal prevista en el artículo 376 Inciso 1 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, verbo rector, transportar sustancia estupefaciente, modalidad dolosa.
16. El día 8 de marzo de 2013, se inició la audiencia preparatoria, no obstante que en desarrollo de la respectiva audiencia, el defensor de confianza de **CRISTIAN RONALDO ORREGO**, puso en conocimiento del señor Juez de la Causa, sobre el diálogo con la señora Fiscal 47 Seccional de Tuluá-Valle, Adscrita a la Unidad de responsabilidad penal para adolescentes, siendo Titular de ese Despacho, la Doctora **BEATRIZ ELENA MARTINEZ MARIN**, de haber llegado a la conclusión de solicitar la preclusión de la investigación, dado que en el interregno de tiempo de la presentación del escrito de acusación a la realización de la acusación propiamente dicha, se recaudó material probatorio con los que se demostró la ausencia de participación del acusado en los hechos investigados, por lo que el titular del Juzgado de Menores Único del Circuito judicial de Tuluá Valle, doctor **LUIS JAIRO JARAMILLO**

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

GUTIERREZ, en desarrollo de la causa, previo acuerdo con las partes, fijó la hora de las 3:00 de la tarde del día **15 de marzo de 2013**, para la realización del acto procesal de preclusión de la investigación, al tenor del artículo 333 del Código de Procedimiento Penal.

17. El día 15 de marzo de 2013, siendo las 3:18 de la tarde se inició la audiencia de verificación de preacuerdo; y con auto interlocutorio número 10 se **decretó la preclusión de la investigación** a favor del procesado **CRISTHIAN RONALDO ORREGOORTIZ**, adquiriendo la connotación jurídica de cosa juzgada, revocándose el internamiento domiciliario que recaía sobre él. Decisión sobre la cual las partes no interpusieron recurso alguno, quedando en firme dicha providencia, tal como quedó consignado en la correspondiente constancia firmada por el señor Juez **LUIS JAIRO JARAMILLO GUTIERREZ, y ANGELA MARIA TAZCON MOLINA** secretaria del Juzgado único de menores de Tuluá, Valle.

18. Tal como consta a folio 178 de la correspondiente carpeta que se mantiene en reserva por parte del Juzgado de menores de Tuluá, Valle del Cauca, al abogado que fungió como defensor contractual se le negó la petición de entrega de copias autenticadas de todo el paginarío de la respectiva carpeta y de los audios en formato CD de las audiencias realizadas en desarrollo del proceso adelantado al joven **CRISTIAN RONALDO ORREGOORTIZ**, las cuales se petitionaron con el fin de ser utilizadas como medios de prueba ante el Procurador delegado en asuntos administrativos como requisito de procedibilidad y de contera, para incoar la demanda Administrativa de Reparación Directa por considerar el titular del Juzgado de menores Doctor **LUIS JAIRO JARAMILLO GUTIERREZ**, que al tenor del artículo 153 del Código de la infancia y de adolescencia, que establece *“la prohibición de revelar la identidad o imagen que permita la identificación de las personas procesadas” en su condición de adolescentes*, por lo que no se expidieron dichas copias de los respectivos folios y audios, negando de plano la petición de expedición de copias peticionadas por el abogado **Julio Solano Zambrano**; petición presentada el 5 de marzo de 2015, ante la secretaria de ese despacho, expidiendo el Auto de sustanciación número **179 de marzo 10 de 2015**, suscrito por el Titular del Despacho del juzgado de menores del Circuito Judicial de Tuluá, Valle, quien actuó como Juez de conocimiento, obrante a folio 280 de la respectiva carpeta. Decisión notificada mediante **oficio 830 de marzo 10 de 2015**.

19- Como quiera que por la privación injusta de la libertad de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO**, además de causarle años materiales e inmateriales, también se le causó daño a bienes protegidos constitucionales, tal como lo ha precisado la Sala Tercera del Honorable Consejo de Estado, en reiteradas sentencias, los cuales no se deben confundir con los daños morales, en especial a la persona humana afectado directamente con la privación injusta de la Libertad como sucedió en el presente caso, daños que autónomos diferentes e independientes a los otros daños antijurídicos que le causaron a este joven el

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

cual no estaba obligado a soportarlo con relación de causalidad por las peticiones y decisiones tanto del operador delegado de la Fiscalía General como de la Rama Judicial tantas veces aquí prenombradas e identificadas, toda vez que para la fecha de los hechos el adolescente, se trasladaba de la ciudad de Cali hacia Cartago Valle, en busca de oportunidad de trabajo para el sostenimiento de su familia y el cubrimiento de gastos de sí mismo, porque por ventura habitamos en un país democrático, social y de derecho, investido constitucionalmente de Derechos, principios y garantías fundamentales como es el derecho de ser tratado con respecto a su dignidad humana (Art. 1 C.N), garantizar, los principio, derechos y deberes consagrados en la Constitución...Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra, bienes creencias y demás derechos y libertades y para asegurr el cumplimiento de los deberes sociales del Estad (art.2 C.N)... a no ser sometido... ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 12 C.N).toda Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre , y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar (art. 15 C. N.)....todas las personas tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin mas limitaciones que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico (Art.16 C.N)...Presunción de inocencia (art. 29C.N)...se garantiza el derecho a la honrra (Art. 21)... el derecho al trabajo (arti. 25 C.N)...toda persona es libre nadie pude ser molestao en su persona o familia ni reducido a prisión o arresto ni detenido (art.28 C.N.)... A tener una familia (Art. 42 C. N.) A no ser separado de ello Art. 44 C.N.) entre otros derechos. Bienes protegidos por la Constitución que la privación injusta de que fue objeto se le ocasionó un daño antijurídico a estos bienes protegidos en la Carta Superior, porque durante el periodo de tiempo que estuvo privado de su libertad no pudo ejercitar libremente, porque debió someterse al régimen de restricciones de las autoridades judiciales y administrativas que vigilaron el cumplimiento de la medida de internamiento precisamente, solicitada por el funcionario delegado de La fiscalía General de la Nación, por el operador de la Rama Judicial que impuso la medida de seguridad, delegando el cumplimiento de la misma a funcionarios del I.C.BF. limitándose el ejercicio de estos derechos de ejercerlos libremente durante el tiempo que duró lo decretado por el señor Juez de Menores peticionado por la Fiscalía General de la Nación por intermedio de su delegado, separándolo de la normalidad de su vida cotidiana. Con la acción de los operadores delegados de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, se le causó un daño antijurídico a CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ, toda vez, que al imponerle medida de seguridad en centro de internamiento, se le causó daño al bien jurídico de su personalidad, al buen nombre entre otros bienes jurídicos protegidos constitucional y legalmente tal como lo consagra el inciso primero del artículo4º del decreto 1260 de julio 27 de 1970, el cual debe ser objeto de indemnización porte de las entidades demandadas.

III- P R E T E N C I O N E S

Declárese administrativamente responsable y condénese a la Nación- Fiscalía General de la Nación, y Rama Judicial, mediante

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

sentenciay paguen los perjuicios materiales (daño emergente, lucro cesante), inmateriales y daño a bienes protegidos constitucionalmente; y otros perjuicios que resulten por los daños antijurídicos causados por Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial a consecuencia de la **PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD** del señor **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, de que fue objeto en el proceso penal contra el mismo, bajo radicado con CUI: **76-834-60-01241-2012-00-225**, con radicación interna del juzgado de menores de Tuluá valle, numero **76-834-31-85-001-2012-00022-00**, iniciada en primer momento, por el fiscal de turno 28 seccional de URI, doctor **JUAN CARLOS GALLEGO ORTIZ**, con relación de causalidad por los daños antijurídicos causados a todo el grupo familiar, objeto de este medio control de REPARACION DRECT, por los hechos de solicitar legalización de captura, legalizar imputación fáctica y jurídica por el delito de la infracción a la Ley penal contenida en el artículo 376 Inciso 1, por la presunta conducta de responsabilidad penal de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector transportar, imponiéndole medida de internamiento en centro especializado y posteriormente sustituyéndole dicha medida por el internamiento en el lugar de su residencia. Actuando en este estadio procesal como fiscal seccional 47 delegada, la doctora **BEATRIZ ELENA MARTINEZ MARIN**; como juez de conocimiento, el doctor **LUIS JAIRO JARAMILLO GUTIERREZ**, juez único de menores del Circuito judicial de Tuluá-Valle, permaneciendo **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ** privado de su libertad personal durante cinco meses y doce días que equivalen a ciento sesenta y cuatro días (164) que estuvo privado injustamente de la libertad al habersele impuesto medida de internamiento, inicialmente en centro transitorio para menores y posteriormente en centro de internamiento especializado y luego sustituyéndole dicha medida por el internamiento en el lugar de su residencia, que sólo el día **15 del mes de MARZO de año 2013**, obtuvo su libertad definitiva al proferirle auto interlocutorio de preclusión a favor de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, decisión con connotación de sentencia con efectos de cosa juzgada al quedar ejecutoriada en esta misma fecha y año, cuyos daños se tazan así:

1.1- POR PERJUICIOS MORALES :

- ❖ Para **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, (afectado material e inmaterial directo). páguese la suma de dinero equivalente a CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (**\$64.435.000**)

Subtotal.....(\$64.435.000)

- 1.2-** páguese a los actores: hijas de **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, **MARIA DE LOS ANGELES ORREGO RODRIGUEZ Y MARIA ISABEL ORREGO VALDEZ**, el equivalente a CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES para cada una de ellas, que equivalen a sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos.....(**\$64.435.000**)

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

Subtotal ciento veintiocho millones ochocientos setenta mil pesos
.....(**\$128.870.000**)

1.3- Páguese a la señora **YOLANDA DE JESUS ORTIZ ORTIZ** (madre de **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**) elequivalentesa :**CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**. Que equivalen a:sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos.....(**\$64.435.000**)

Subtotal: sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos.....(**\$64.435.000**)

1.4- Páguesea señora **MARIA ALEJANDRA VALDEZ PATIÑO**(compañera permanente de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**)equivalentes a:**CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**:sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos.....(**\$64.435.000**)

Subtotal: sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos.....(**\$64.435.000**)

1.5- Páguesea**LUISA FERNANDA ORREGO ORTIZ y MONICA FERNANDA LONDOÑO ORTIZ** (hermanas consanguíneas **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**)la suma equivalente a: **CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALESVIGENTES**para a cada uno de ellas:Treinta y Dos Millones doscientos diecisiete mil quinientos pesos.....(**\$32.217.500**)

Subtotal: sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos.....(**\$64.435.000.**)

1.6- Páguese a **YOLANDA DE JESÚS ORTIZ ORTIZ,CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ,LUISA FERNANDA ORREGO ORTIZ**(herederos de **ILDEBRANDO ORTIZ**, padre de **CRISTHIAN ORREGO ORTIZ**), el equivalente a:**CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES**:sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos.....(**\$64.435.000**)

Subtotal: sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos.....(**\$64.435.000**)

1.7- Páguese a **YOLANDA DE JESÚS ORTIZ ORTIZ**(heredera del extinto **ANTONIO ORTIZ MUÑOZ**, abuelo de **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**),la suma equivalente a: **CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**:Treinta y Dos Millones doscientosdiecisiete mil quinientos pesos.....(**\$32.217.500**)

Subtotal: Treinta y Dos Millones doscientosdiecisiete mil quinientos pesos.....(**\$32.217.500**)

1.8- Páguese a**ARBey CUELLAR URIBE** (compañera permanente de**MÓNICA****FERNANDA LONDOÑO ORTIZ**-hermana de **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**),la suma de dinero de: **CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**,equivalente aTreinta y Dos Millones doscientos diecisiete mil quinientos pesos.....(**\$32.217.500**)

Subtotal: Treinta y Dos Millones doscientosdiecisiete mil quinientos pesos.....(**\$32.217.500**)

Valor que tengan a la fecha de ejecutoria de la sentencia administrativa con sus respectivos intereses e indexaciones a la fecha que se haga efectivo el pago total, puesto que se demostró que la investigación de responsabilidad penal adelantada contra **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, por la presunta infracción a la Ley penal contenida en el artículo 376 inciso 1 de la Ley 5999 de 2000, verbo rector transportar a título doloso, no tuvo ninguna participación a título de autor ni cómplice de la misma. Daños antijurídicos causados al señor **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ** (afectado material e inmaterial directo), su núcleo familiar conformado por éste, **MARIA DGE LOS ANGELES ORREGO RODRIGUEZ Y MARIA ISABEL ORREGO VALDEZ** (hijas de **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**); a la señora **MARIA ALEJANDRA VALDEZ PATIÑO** (compañera permanente de **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**); **YOLANDA DE JESUS ORTIZ ORTIZ** (madre biológica de **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**); **LUISA FERNANDA ORREGO ORTIZ y MONICA FERNANDA LONDOÑO ORTIZ** (hermanas consanguíneas de **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**); **ARBHEY CUELLAR URIBE** (compañero permanente de **MÓNICA FERNDADA LONDOÑO ORTIZ**, ésta a su vez hermana de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**); a los ahora extintos **ILDELBRNADO ORREGO, Y ANTONIO ORTIZ**, creando de esta manera, una situación antijurídica que vulneró y afectó el derecho de la libertad del procesado, la vergüenza pública, afectando su dignidad humana, al habersele sometido al escarmiento público, a través de sistemas informáticos, al imputársele una conducta punible de gran connotación jurídica y repudio social, como lo es ser un narcotraficante que afectaba a la Sociedad. Dado que, si se hubiese actuado a tiempo, primero investigar a fondo y después de ello, si hubiese existido mérito, habersele impuesto la medida de internamiento, tal cual como sucedió, primeramente, en el Lugar de paso (Agua Clara) de Tuluá Valle, en condiciones infrahumanas, en centro de internamiento especializado Valle de Lili, en el lugar de su residencia sin poderse movilizar hacia otros lugares fuera de su recinto familiar, privándole el derecho al trabajo entre otros, afectando su presunción de inocencia y de dignidad humana generado por la privación injusta de su libertad de que fue objeto sin justa causa con relación de causalidad entre la Fiscalía general de la Nación y la Rama Judicial, el primero, al solicitar la medida de seguridad de internamiento en centro cerrado, el segundo, a cargo del operador de la Rama Judicial al irrogarle una medida de seguridad de internamiento en centro especializado y luego en el lugar de la residencia del mismo; y no actuar a la inversa como sucedió en el presente caso, privar primeramente en forma injusta de la libertad a esta persona humana y luego investigar, ha generado estos daños antijurídicos; por lo que debe declararse administrativamente y patrimonialmente como responsables por los daños antijurídicos ellos causados, y en consecuencia, condenar patrimonialmente a la Nación-Rama Judicial-

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

Fiscalía General de la Nación, para que resarzan los perjuicios causados a modo de compensación e indemnización las sumas de dinero aquí indicada, en razón al profundo dolor, la vergüenza, la angustia, sufrimiento, afectación moral, sufrimiento y sometimiento a toda esta familia al escarnio público, acrecentando el dolor y sufrimiento a cada uno de ellos, y que por ese actuar antijurídico de las entidades de la Nación, aún continúan sufriendo el rechazo de la sociedad, por cuanto, hasta la fecha, no se han realizado las disculpas públicas y solicitado el perdón en forma pública por el injusto cometido contra éste joven ciudadano colombiano, en conjunto con su núcleo familiar, parientes consanguíneos y por afinidad.

En efecto, páguese por este perjuicio lo aquí solicitado o en su defecto, el valor máximo que reconozca la jurisprudencia del Consejo de Estado, en razón del dolor, la pena, el escarnio público, la afectación moral que ocasionaron el hecho de encontrarse procesado, afectando también a toda su familia, y por ello, víctimas de un acto judicial injusto y arbitrario como lo fue primeramente, la retención injusta, afectando la libertad de libre locomoción, y posteriormente, la privación injusta de la libertad, también a órdenes de un operador de la rama Judicial, acaecida u originada por la arbitrariedad de la Nación- Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, en el proceder para con los actores que dieron lugar a la detención e injusta privación de la libertad; procesándolo e investigándolo por la conducta de responsabilidad penal de narcotráfico y del cual fue víctima, cuando desde el inicio de la investigación, en especial, al momento en que fue retenido y vinculándolo al proceso mediante la apertura de instrucción, ahí debió aplicarse el principio universal y rector del IN DUBIO PRO REO, y no privar de la libertad para luego investigar como sucedió en el caso de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, el cual tuvo que soportar zozobra, aflicción conjuntamente con toda su familia, a consecuencia de culpa grave con relación de casualidad por los daños causados por cada una de las entidades demandadas. Daños antijurídicos que ninguno de los actores estaban obligados a soportarlos, porque en toda sociedad democrática y social se deben garantizar, respetar y hacer efectivos los principios y derechos fundamentales de toda persona humana residente y de paso por el territorio nacional, como son el derecho de la libertad, presunción de inocencia, vida digna, al buen nombre, a no padecer ningún daño que los afecte física y moralmente tal y como en el presente caso sucedió, vulnerando y haciendo caso omiso a las normas de derecho supra constitucionales consagrados en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en la Constitución Política y en la misma ley, contraviniendo además, la jurisprudencia de las Altas Cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en innumerables sentencias a las cuales debieron acogerse los operadores judiciales y la Fiscalía General de la Nación, y no causar el daño antijurídico a cada uno de los actores los cuales deben ser resarcidos por el estado Colombiano a través de cada una de las entidades demandadas.

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

En relación a esta clase de daño antijurídico como perjuicio moral, El Consejo de Estado en sentencia de 13 de marzo de 2013, expresó lo siguiente:

"La sala considera importante señalar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad."(Sentencia del 11 de julio de 2012. M.P.Dr.Carlos Alberto Zambrano Barrera. Exp.23.688.

Y sobre la tasación de los mismos, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, los consideró: en sentencia de 24 de febrero de 2013, M.P.Carlos H. Jaramillo Delgado. Exp.2007-00115-0.

"Indican tales criterios, que los perjuicios morales se presumen respecto del directo afectado o privado injustamente de la libertad, y respecto de sus familiares más cercanos, según las suficientes reglas que sobre el punto ha decantado la misma jurisprudencia. La tasación del monto que se reconoce por perjuicio moral, es decir de carácter compensatoria, y se hace por parte del juez, teniendo en cuenta, en términos generales, la intensidad del perjuicio, siendo que para mayor intensidad se reconoce el monto máximo de 100 SMLM.)

"En aplicación de esos criterios, la Sala encuentra razonable reconocer a favor de YIRA BOLAÑOS ARTURO, la suma de 85 SMLM por concepto de perjuicios morales, si se tiene en cuenta que el monto máximo se reconoce en casos de intensidad extrema del perjuicio - muerte, lesiones, privaciones de la libertad por largo tiempo-, mientras que la privación de la libertad del actor se prolongó durante 16 meses y 8 días, en los cuales se presume lo embargaron sentimientos de congoja y angustia, sin que concurren otros criterios que impongan un monto mayor por este concepto.."

Lo anterior, teniendo como precedente jurisprudencial, la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, fechada el 14 de marzo de 2002, expediente 12076 y la sentencia, del 20 de febrero de 2008, expediente 15980, de esa misma colegiatura. Igualmente, la sentencia del 14 de mayo de 2002, con radicación 16932 del Consejo de Estado Sección Tercera, en cuya parte motiva preciso: " Si bien no existen en el proceso pruebas directas sobre la causación de este tipo de daños a los actores, por presunción de hombre, la regla de la experiencia indican que la imposición y ejecución de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, máxime si se tiene en cuenta que es injusta, sumado al hecho de que esta no contó con el beneficio de libertad condicional, por ser evidente que la internación de una persona en un centro carcelario de suyo, genera angustia y sufrimiento moral, pues, como es apenas natural y obvio, por regla general este tipo de hechos no son precisamente fuente de alegría, gozo o regocijo espiritual; por el contrario, por corta que sea su duración en el tiempo, causan perturbación emocional y desasosiego, en razón de privar a la persona de un derecho fundamental y consustancial al hombre, como es la libertad."

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

"El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva".

Sobre el particular, resulta ilustrativa la siguiente valoración del Tribunal Superior Español, expuesta en sentencia del 30 de junio de 1999.

“A cualquier le ocasiona un grave perjuicio moral, el consiguiente desprestigio social, y la ruptura con el entorno que la prisión comporta, además de la angustia, ansiedad, inseguridad, inquietud, frustración, fastidio, irritación o terror que suele conllevar. Así mismo, las circunstancias de edad, salud, conducta cívica, hechos imputados, antecedentes penales o carcelarios, tiene relevancia para una eventual individualización de las consecuencias con el consiguiente reflejo en la cuantía de la compensación económica de aquel”.

Sobre la presunción del padecimiento de dichos perjuicios por los familiares del privado de la libertad, ha reiterado:

“Se pone de presente que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que en casos de detenidos en establecimiento carcelarios se presume el dolor moral. La angustia y la aflicción de la víctima directa del daño, por la privación de la libertad, de la misma manera que se presume dicho dolor respecto de sus seres queridos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la sala lo ha reconocido en otras oportunidades”. Consejo de Estado, Sección Tercera del 08 de julio 2009, radicado número 16932.

Y sobre la tasación fijo la siguiente:

“Por otra parte, no puede perderse de vista el principio de equidad, también previsto en la norma transcrita para ser tenido en cuenta en la labor de la evaluación del daño. Su importancia resulta mayor cuando se trata de la indemnización de un perjuicio por la naturaleza de éste, no puede ser reparatoria sino simplemente compensatoria. Se impone al juez, entonces, el ejercicio de una cierta discrecionalidad que, sin embargo, debe encontrarse suficientemente razonada y fundada en las probanzas que en el proceso, obren sobre la existencia del perjuicio y su intensidad.

No se trata, en efecto de una facultad arbitraria, por ello, en su desarrollo, debe buscarse también la garantía del principio de igualdad, lo que hace necesaria la comparación de la situación debatida con otras ya decididas con fundamento en el análisis de los diferentes aspectos que determinan aquellas y éstas, dentro de los cuales deberá tomarse en cuenta, por supuesto el valor real de la indemnización”.

Y más adelante expuso:

“Sin duda, la afirmación de la independencia del juez, implica la asunción, por parte de éste de una responsabilidad mayor. Deberá ponerse especial esmero en el cumplimiento del deber de evaluar los diferentes elementos que, en cada proceso, permitan establecer no sólo la existencia del perjuicio moral, sino su intensidad, e imponer las máximas condenas únicamente en aquellos eventos en que de las pruebas practicadas, resulte claramente establecido un sufrimiento de gran profundidad e

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

intensidad, superior a muchos de los pesares imaginables. **Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de septiembre de 2001, radicación 1323-15646."**

Citas jurisprudenciales que realizaron los Honorables Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, Doctores CARLOS H. JARAMILLO DELGADO, MOISES RODRIGUEZ PEREZ y CARMEN AMPARO PONCE DELGADO, en el proceso con expediente 2010-00330-00, siendo actor JULIO CESAR MUÑOZ Y OTROS, demandado Nación - Fiscalía General de la Nación- Rama Judicial, en acción de reparación directa que resulto condenada la Fiscalía General de la Nación".

2.-POR PERJUICIOS MATERIALES:

2.1. DAÑO EMERGENTE: Páguese ala señora: **YOLANDA DE JESUS ORTIZ ORTIZ**, la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS(\$5.000.000. 00)**

Suma de dinero que corresponde a honorarios pagados al Abogado **JULIO SOLANO ZAMBRANO**, que asumió la defensa técnica del procesado.

2.2- LUCRO CESANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS(\$4.402.908). A esta suma de dinero se le incrementó el veinticinco (25%) por ciento que corresponde a prestaciones sociales quedando el salario mínimo en **OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CETAVOS.....(\$805.437.5)**

Por lo anterior, el salario mínimo legal vigente con el correspondiente incremento del 25% , equivalente a prestaciones sociales quedan en **\$26.847** diarios, por lo que realizada esta operación matemática tenemos que **\$26.847 X164** días que fue lo que estuvo privado de la libertad se obtiene como resultado **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS.....(\$4.402.908).**

Que corresponden a cinco meses (5) y doce días que estuvo privado de su libertad, y el tiempo que duró sin conseguir trabajo después de haber recuperado la libertad **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**. que equivalen a 35 semanas que suman por este concepto: **SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CIENTO VEINTICINCO CENTAVOS.....(\$7.047.578.125),** valor sumado con el respectivo incremento salarial del 25% que corresponden a prestaciones sociales.

SUBTOTAL: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS..... (\$12.487.876)

Sumas de dinero que se deben incrementar de resultar mayor la operación matemática conforme a la fórmula utilizada para ello tal como paso a indicarlo conforme a la jurisprudencia reiterativa del Honorable Consejo de Estado :

Respecto al lucro cesante el Consejo de Estado ha sentado precedente en los siguientes términos:

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

"El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva".

“Siguiendo la jurisprudencia contencioso administrativa, en estos casos en los que se logra establecer que una persona es productiva, pero los medios probatorios no dan cuenta precisa del monto del ingreso de la persona, el lucro cesante se liquida con base en el salario mínimo legal mensual. Al respecto, el Consejo de Estado ha dicho:

“esto le permite a la Sala tener certeza que la señora BOLAÑOS ARTURO, era productiva económicamente antes de ser privada de la libertad, por lo que ha de procederse al reconocimiento a su favor del lucro cesante, el cual se liquidará por el tiempo efectivo de privación de su libertad, esto es, 16 meses 8 días, comprendidos entre el 13 de enero del 2003 hasta el 21 de mayo de 2004, más el tiempo que se considera tardaría en conseguir empleo, correspondiente a 35 semanas. Sobre esto último, ha reiterado el Consejo de Estado:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el **Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**, de acuerdo con la cual dicho periodo equivale a **35 semanas (8.75 meses)**. “

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp.13168, M.P.Mauricio Fajardo Gómez.)

En esta liquidación no se aplicó la fórmula para actualizar el valor a la fecha de la ocurrencia del daño, sino que se tomó el valor del salario mínimo mensual actual, por lo que se debe aplicar la fórmula matemática establecida conforme la jurisprudencia del CONSEJO DE ESTADO.

Indexación al valor presente

Ra: $Rh \times \frac{\text{índice final}}{\text{Índice inicial}}$

Índice inicial

El Consejo de Estado en marzo de 2013, sobre este tema específico:

El salario mínimo equivalente a \$644.350 se le debe aumentar el equivalente al 25% que corresponde a las prestaciones sociales quedando en \$805.437.

3- DAÑO A BIENES CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS.

3.1 Páguese por este DAÑO ANTIJURÍDICO en favor de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, la suma de dinero equivalente a CIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.....(\$ 64. 435.000.).

Sub total.....(\$ 64.435.000).

Al respecto sobre la causación de este daño, el Honorable Consejo de Estado- Sección Tercera, en sentencia de segunda instancia en el proceso

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

con radicado N°66001233100020010044501- Expediente 28543 del 12 de febrero de 2015, siendo Consejero Ponente el Doctor HERNANANDRADE RINCON, que recoge el concepto de reiteradas sentencias sobre la evolución del “daño a la Vida de Relación”, ahora nominado **Daño a Bienes Constitucionalmente protegidos**, expresó lo siguiente:

.- Daño a bienes constitucionalmente protegidos¹, denominado por el actor como “daño a la vida de relación”.

Este perjuicio se solicitó de la siguiente manera:

“2.2 PERJUICIO POR EL DAÑO A LA VIDA DE RELACION. Se reclama por este concepto para cada uno de los ilegalmente detenidos, señores Pablo Emilio Villada Valencia, Luis Guillermo Gallón Restrepo y Álvaro José Magón López, el equivalente en moneda nacional a cuatro mil (4.000) gramos de oro fino, al precio que se sirva certificar el Banco de la República.

En la demanda acumulada, igualmente fue materia de solicitud:

“2.2. PERJUICIO POR EL DAÑO A LA VIDA DE RELACION. Se reclama por este concepto para cada uno de los cónyuges ELIZABETH CADENA MORENO, MARTHA NIDIA MORALES y LUZ AYDA CORTES MONSALVE CARMONA de los señores Pablo Emilio Villada Valencia, Luis Guillermo Gallón Restrepo y Álvaro José Magón López, respectivamente, el equivalente en moneda nacional a CIENTO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES para cada una de ellas.”

Así mismo, en el libelo introductor se indicó que los señores sobre quienes recayó la detención, así como los miembros de su familia se vieron seriamente afectados en su honor, buen nombre, fidelidad conyugal, libertad de acción y autoridad paterna.

Al respecto se tiene que el aludido perjuicio ha sido objeto de estudio por la Sala en varias oportunidades; en efecto, en la sentencia del 19 de julio de 2000 se reformuló el concepto del perjuicio fisiológico por el de daño a la vida de relación²; más adelante, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007³, la Sala abandonó dicha denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia. Finalmente, la Sala cambió nuevamente la denominación de dicho perjuicio por el de daño a la salud, tal y como lo señaló mediante la providencia de 14 de septiembre de 2011⁴.

Así las cosas, al realizar la adaptación correspondiente a la comentada línea jurisprudencial, debe entenderse entonces que en cuanto la parte actora solicitó la indemnización por el “daño a la vida de relación”, ello encuadra perfectamente en lo que hoy la Jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos, los cuales evidentemente resultaron afectados con la medida impuesta a los señores demandantes Luis Guillermo Gallón Restrepo, Pablo Emilio Villada Valencia y Álvaro José Magón López. En el presente caso se encuentra que dicha vulneración se concretó en punto al artículo 42 de la Constitución Política el cual hace referencia a la familia, habida cuenta que durante el tiempo en que estuvieron privados del ejercicio de su derecho fundamental a la libertad, se perturbó esa integración con sus familiares.

Así mismo, al estar las víctimas directas del daño privados de su libertad, también se les afectó el libre desarrollo de su personalidad - otro bien constitucionalmente protegido-, por cuanto se le

¹ Se reiteran en este punto las consideraciones expuestas en forma reciente por la Subsección, en sentencia de mayo 12 de 2014, exp.36.268; M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

² Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Exp. 11.842. M.P. Dr. Alier Hernández Sección Tercera.

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

⁴ Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 14 de septiembre 2011, exp. 19031, M.P. Dr. Enrique Gil Botero.

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

limitó la libertad general de hacer o no hacer lo que a bien considere dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

De conformidad con lo anterior, al encontrar e identificar los bienes constitucionalmente protegidos que resultaron afectados con la medida impuesta a los demandantes, se entiende configurado el daño que en la demanda se solicitó indemnizar, pues es una evidencia que el solo hecho de la privación de la libertad, los separó de la normalidad de sus vidas, de recibir el afecto continuo de su familia, de residir en la comodidad de sus viviendas, de desempeñar la actividad laboral a la que se dedicaban, todo ello por espacio de once meses.

En ese orden de ideas, la Sala reconocerá indemnización por dicho perjuicio en favor de los señores Luis Guillermo Gallón Restrepo, Pablo Emilio Villada Valencia y Álvaro José Magón López en la cuantía equivalente a 80 SMLMV para cada uno de ellos.”

1. TOTAL: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.....(\$597.402.876.)

2.1.4.1. Las sumas de dinero en que se condene a la Nación deberán ser indexadas conforme al incremento del índice de precios al consumidor desde su causación hasta la fecha de pago.

2. 1.4.2. Las sumas de dinero relacionadas anteriormente, como consecuencia de la condena a la Nación, devengarán los intereses moratorios señalados en los artículos 176 y 177 del C.C.A, y de las normas que las adicionan o complementen desde la fecha de ejecutaría de la sentencia objeto de la Demanda.

3. 1.4.3. Las entidades Convocadas darán cumplimiento al pago de las sumas reconocidas dentro de los términos establecidos en código de Procedimiento administrativo, fijados a partir de la ejecutoria de la sentencia que declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación en cabeza de cada una de las entidades que resultaren vencidas

IV-. ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA

Me permito fijar razonadamente la cuantía de la pretensión mayor acumulada, correspondiente a los perjuicios materiales:

✓ **A- 1- INDEMNIZACION POR DAÑO EMERGENTE: CINCO MILLONES (\$5.000.000.00),** al momento de presentar la demanda, causados al demandante directo, que corresponde al valor dinerario por concepto de honorarios por la defensa técnica de**CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ,** al Abogado defensor de confianza **JULIO SOLANO ZAMBRANO,** consistente en **CINCO MILLONES..... (\$5.000.000.00) DE PESOS,** como pago que realizó la señora madre del perjudicado directo por la privación injusta de la libertad a que fue objeto su hijo.

SUBTOTAL DE LA PRETENSION POR DAÑO EMERGENTE: TRES MILLONES DE PESOS..... (\$5.000.000.00).

B. 2-INDEMNIZACION POR EL DAÑO DE LUCRO CESANTE:la suma de dinero **SUBTOTAL: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$12.487.876).**

✓ que corresponden al valor dinerario dejado de percibir por el daño causado al perjudicado directo, durante ciento sesenta y cuatro días(164) días que permaneció detenido **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, incluido el valor de dinero dejado de percibir durante 8.75 semanas conforme lo ha establecido la jurisprudencia del CONSEJO DE ESTADO, teniendo como base el salario mínimo actual equivalente a SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MENSUALES (\$644.350.00) con el respectivo incremento salarial del 25% correspondiente prestaciones sociales.

TOTAL DE LA PRETENSION COMO ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTIA:

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.....(\$ 17.478.876.00).

V. IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD

En este acápite para efectos de demostrar la imputación de responsabilidad en cabeza de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, haré referencia a los siguientes temas que a continuación desarrollaré.

Los hechos expuestos concisa y brevemente además de violar el Bloque de Constitucionalidad compuesto por todo el abanico de Pactos, Protocolos y Convenios ratificados por nuestro Estado Colombiano, sirven de base para solicitar el reconocimiento y pago de todos los daños ocasionados por los demandados LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en razón de haberse ocasionado un DAÑO ANTIJURÍDICO por el desconocimiento de una serie de garantías constitucionales y supraconstitucionales propias del proceso penal. Pues, en el proceso surtido en contra de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, no se garantizó por parte de las entidades demandadas una verdadera protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política.

El moderno constitucionalismo suministra un claro fundamento para la delineación de los fines del proceso penal de hoy, y por ello, en el caso colombiano, aparte del efecto vinculante del sistema de valores, principios y derechos contenidos en el texto superior, concurren múltiples disposiciones constitucionales que indican la dirección que debe imprimirse a la actuación penal.

Así: el artículo 2º de la Carta política, señala como fines esenciales del Estado, entre otros, la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y el aseguramiento de un orden

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

justo y dispone que las autoridades están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades. El artículo 228 ibídem ordena que en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial sobre el procedimiento y el artículo 229 ibídem garantiza el derecho que tienen todas las personas a acceder a ella.

Igualmente, se ha violado el Art. 6 de la C.N. que determina Que los funcionarios públicos son responsables por la violación de la ley y por la omisión y extralimitación de sus funciones.

Como fundamento jurídico de la presente acción invoco el art. 90 de la C.N. que determina que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables derivados de las acciones u omisiones de las autoridades públicas. Invoco como normas de Derecho que fundamentan nuestras pretensiones:

Los artículos 1, 2, 6,21,29 y 90 de la Constitución Política, artículos 65 al 68 de la Ley 270 de 1995, Principios de Dignidad Humana, Presunción de Inocencia, Defensa, Contradicción, Investigación Integral consagrados en nuestra Carta de Navegación Jurídica y en los artículos 1º, 7º, 8º, 13º, 20º y 24º de la Ley 600 de 2.000 ibídem con los artículos 1 modificado por el artículo 1º de la Ley 1142 de 2.007;2,3,7,inciso primero y último del artículo 10 de la Ley 906 de 2.004; como normas rectoras de aplicación inmediata y no residual (Art. 24 ibídem); en congruencia con el Bloque de Constitucionalidad, Art. 18 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8, 10, 11-1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 10-1, 14-2, 14-3-e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8º -2f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"

De este modo, del sistema de valores, principios y derechos contenidos en la Carta y de las disposiciones que se acaban de citar, se infiere como una de las finalidades preponderantes del proceso penal, la realización de los derechos sustanciales. Finalmente, la materialización a favor de quienes intervienen en el proceso penal, de las garantías constitucionales de trascendencia procesal.

Como puede advertirse, entonces, han pasado los tiempos en que por ventura era legítima la barbarie de los tiempos deMédicis cuando por orden del proscripto soberano los condenados eran entregados para la anatomía, esto es, se entregaban a los hospitales para que fueran seccionados vivos a fin de incrementar los estudios de medicina ⁵ y en donde el proceso penal se orientaba por propósitos simplemente vindicativos de tal manera que se asegurara el castigo del delincuente. Hoy se dirige a la realización de las normas de derecho sustancial, tanto las que procuran la condena de los responsables como las que disponen la absolución de los inocentes y a garantizar los derechos fundamentales de los intervinientes, pues el proceso penal ya no es una ritualidad vacía de

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

contenido sino un escenario democrático en el que también se debe luchar por la realización de esos derechos.

De este modo el Derecho Penal es legítimo si se orienta a esas finalidades y deja de serlo si se desentiende de alguna de ellas. Por ello, no se realizan sus propósitos fundamentales si la condena del responsable de una conducta punible se logra desconociendo las garantías constitucionales que le amparan.

El proceso penal, junto con la política criminal del Estado y la dogmática penal, constituye uno de los espacios en los que más directamente incide el constitucionalismo. Ello es así porque las garantías procesales dejaron de ser un ámbito de configuración legislativa con escasas referencias a los textos superiores para asumir el carácter de derechos fundamentales. Ese viraje de las garantías procesales le imprimió una nueva naturaleza a la actuación penal pues convirtió al proceso en un escenario democrático idóneo para la realización de los derechos fundamentales de trascendencia procesal, y ensanchó su horizonte de protección ya que, en virtud de la especial naturaleza que les asiste, su defensa ya no se puede procurar solo al interior del proceso penal sino también por fuera de él a través del amparo constitucional.

Lo anterior, debe tenerse como fundamento para encontrar ajustado a derecho el daño antijurídico que le causó la Nación a **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ** y a la familia de éste, al privarlo injustamente de su libertad, siendo actor de ese error judicial, por el fiscal de turno 28 seccional de URI, doctor **JUAN CARLOS GALLEGO ORTIZ**, con relación de causalidad por los daños antijurídicos causados a todo el grupo familiar, objeto de esta convocatoria, al solicitar legalización de captura, imputación fáctica y jurídica por la infracción a la Ley penal contenida en el artículo 376 Inciso 1, por la presunta conducta de responsabilidad penal de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector transportar, imponiéndole medida de internamiento en centro especializado y posteriormente sustituyéndole dicha medida por el internamiento en el lugar de su residencia, actuando como fiscal seccional 47 delegada la doctora **BEATRIZ ELENA MARTINEZ MARIN**, y como juez de conocimiento el doctor **LUIS JAIRO JARAMILLO GUTIERREZ**, juez único de menores del Circuito judicial de Tuluá-Valle, por lo que se hace merecedora la Nación resarcir los perjuicios causados a **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ** y a la familia de éste, todos ellos demandantes a la Nación- Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial, a través de los representantes legales de cada una de éstas entidades que la conforman.

V. D E R E C H O

Invoco como fundamento de derecho el artículo 1, 2, 13, 21, 29, artículo 90 de la Constitución nacional; de la Ley 1285 de 2.009 que modificó el artículo 42° de la ley 270 de 1.996, el artículo 64 de la Ley 446 de 1.998, el Decreto 1818 de 1998, la Ley 640 de 2.001,3 del decreto 1716 de 2009, y el artículo 136 numeral 8 del C.C.A; **140,165 de la Ley 1437 de 2.011. (Acción de Reparación Directa).**

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

VI-MEDIOS DE PRUEBA

A-DOCUMENTALES:

1. Copa autentica de constancia de recuento procesal, donde se indica que mediante auto interlocutorio número 10 de fecha marzo 15 de 2013, la investigación que cursaba contra el adolescente Cristian Ronaldo Orrego Ortiz, terminó con decisión de preclusión de la investigación a su favor, quedando ejecutoriado en esa misma fecha con efecto de cosa juzgada.
2. Copia de la petición de solicitud de expedición de copias de todo el paginario de la carpeta, que reposa en los archivos del Juzgado Único de Menores de Tuluá- Valle.
3. Copia autentica del auto de sustanciación número 179, adiado en marzo 10 de 2015, mediante el cual niega la expedición de copia de la carpeta con radicado interno número **76-834-31-85-001-2012-00022-00, SPOA: 76-834-60-01241-2012-00225**, seguido contra **Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz**, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
4. Un recibo de pago de honorarios profesionales por valor de cinco millones (\$5.000.000.00) de pesos pagado por la señora Yolanda de Jesús Ortiz Ortiz, al abogado Julio Solano Zambrano, por la defensa de Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz.
5. Registro civil de nacimiento de Cristian Ronaldo Orrego Ortiz, con el cual se demuestra el parentesco con todo su núcleo familiar.
6. Registro civil de nacimiento de Luisa Orrego Ortiz, con el cual se demuestra el parentesco con Cristian Ronaldo Orrego Ortiz
7. Registro civil de nacimiento de las menores María de los Angeles OrregoRodriguez, con indicativo serial número 50385931 y María Isabel Orrego Valdez, indicativo serial número 525426702, con los cuales se demuestra el parentesco con su padre Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz.
8. Registro civil de nacimiento de Mónica Fernanda Londoño Ortiz, con el cual se demuestra el parentesco con Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz.
9. Registro civil de nacimiento de Yolanda de Jesús Ortiz Ortiz, con el cual se demuestra el parentesco con Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz, asimismo, con el extinto Antonio Ortiz Muñoz, abuelo de Cristian Ronaldo Orrego Ortiz.
10. Registro civil de defunción de Hildebrando Orrego Vélez, con el cual se demuestra la fecha del deceso después de que Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz, estuvo privado de su libertad, quien en vida sufrió daños morales por la privación injusta de la Libertad de éste.
11. Dos declaraciones extra juicio, tomada en notaria con los cuales se demuestran la unión marital de hecho entre compañeros permanentes de Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz y María Alejandra Valdez Patiño, las misma que en su contenido declaran las señoras Dora Carmenza Villota Pino y Emérita Ramírez Sánchez.
12. Declaración extra juicio de Cristian Ronaldo Orrego Ortiz y María Alejandra Valdez Patiño sobre la existencia de la Union Marital de hecho entre ellos.

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

13. Un recibo de pago de honorarios por valor de cinco millones de pesos (\$5.000.000) pagados por Yolanda de Jesús Ortiz Ortiz, al abogado Julio Solano Zambrano.

B-TESTIMONIALES:

Se recepciones a la señora DORA CARMENZA VILLOTA PINO, identificada con la cedula de ciudadanía número 38.558.861, de Cali y la señora EMERITA RAMIREZ SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 38.941.750, de Cali, para que depongan de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes de Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz y María Alejandra Valdez Patiño.

C-DE SOLICITUD

A efecto de que sirvan como pruebas documentales y como pruebas adjuntas trasladadas:

1. Solicito se oficie al Centro de Reclusión para adolescentes de Agua Clara de Tuluá-Valle, para que se allegue copia de la cartilla biográfica, donde consta el espacio de tiempo en que estuvo recluido Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz en ese centro de internamiento.

2--Se oficie al Director del Centro de internamiento para adolescentes de del Valle de Lili, en Cali-Valle, para que se allegue la cartilla Biográfica del joven **CRISTIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, para que obre como prueba del espacio de tiempo en que estuvo privado de la Libertad internado en esa institución adscrita al I.C.B.F.

2. Se oficie al Juzgado Único de menores de Tuluá-Valle para que allegue copias auténticas de toda la foliatura de la carpeta del correspondiente proceso penal con **C.U.I. 76-834-31-85-001-2012-00022-00, SPOA: 76-834-60-01241-2012-00225**, donde obran todos los medios de prueba, incluidas las actas de las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación fáctica y jurídica, imposición de medida de internamiento de **CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ**, y demás actas de todas las diligencia que se produjeron en dicho proceso.

VII-ANEXOS

1. Copa autentica de constancia de recuento procesal, donde se indica que mediante auto interlocutorio número 10 de fecha marzo 15 de 2013, la investigación que cursaba contra el adolescente Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz, termino con decisión de preclusión de la investigación a su favor, quedando ejecutoriado en esa misma fecha con efecto de cosa juzgada.
2. Copia de la petición de solicitud de expedición de copias de todo el paginarío de la carpeta, que reposa en los archivos del Juzgado Único de Menores de Tuluá,Valle.
3. Copia autentica del auto de sustanciación número 179, adiado en marzo 10 de 2015, mediante el cual niega la expedición de copia de la carpeta con radicado interno número **76-834-31-85-001-2012-00022-00, SPOA: 76-834-60-01241-2012-00225**, seguido contra

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

- Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
4. Un recibo de pago de honorarios por la defensa de CRISTHIAN RONALDO ORREGO ORTIZ, al abogado JULIO SOLANO ZAMBRANO
 5. Registro civil de nacimiento de Cristian Ronaldo Orrego Ortiz, con el cual se demuestra el parentesco con todo su núcleo familiar.
 6. Registro civil de nacimiento de Luisa Fernanda Orrego Ortiz, demostrativo del parentesco con Cristian Ronaldo Orrego Ortiz, y su núcleo familiar
 7. Registro civil de nacimiento de las menores María de Los Ángeles Orrego Rodríguez, con indicativo serial numero 50385931 y Maríalsabel Orrego Valdez, indicativo serial número 525426702, con los cuales se demuestra el parentesco con su padre Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz.
 8. Registro civil de nacimiento de Mónica Fernanda Londoño Ortiz, con el cual se demuestra el parentesco con Cristian Ronaldo Orrego Ortiz.
 9. Registro civil de nacimiento de Yolanda de Jesús Ortiz Ortiz, con el cual se demuestra el parentesco con Cristian Ronaldo Orrego Ortiz, asimismo, con el extinto Antonio Ortiz Muñoz, abuelo de Cristian Ronaldo Orrego Ortiz.
 10. Registro civil de defunción de Hildebrando Orrego Vélez, con el cual se demuestra la existencia de la unión marital de hecho con YOLANDA DE JESUS ORTIZ ORTIZ y parentesco con Luisa Fernanda Orrego Ortiz.
 11. Dos declaraciones extra juicio, tomada en notaría con los cuales se demuestran la unión marital de hecho entre compañeros permanentes de Cristian Ronaldo Orrego Ortiz y María Alejandra Valdez Patiño, las misma, que en su contenido declaran las señoras Dora Carmenza Villota Pino y Emérita Ramírez Sánchez.
 12. Declaración extra juicio de Cristian Ronaldo Orrego Ortiz y María Alejandra Valdez Patiño demostrativas de su unión marital de hecho.
 13. Memorial poder de Cristhian Ronaldo Orrego Ortiz para procuraduría y juzgado administrativo
 14. Memorial poder de Cristian Ronaldo Orrego Ortiz, en representación de sus hijas menores.
 15. Memorial poder de Yolanda de Jesús Ortiz Ortiz.
 16. Memorial poder de Yolanda de Jesús Ortiz Ortiz, en representación de Luisa Orrego Ortiz.
 17. Memorial poder de Yolanda de Jesús Ortiz Ortiz, en representación de Luisa Orrego Ortiz, como herederas de Hildebrando Orrego Vélez.
 18. Memorial poder de Yolanda de Jesús Ortiz Ortiz Monicafernanda Londoño ortiz, como heredera de Antonio Ortiz Muñoz.
 19. Memorial poder de María Alejandra Valdez Patiño.
 20. Memorial poder de Mónica Fernanda Londoño Ortiz.
 21. Fotocopia de cedula de ciudadanía de Cristian Ronaldo Orrego Ortiz.
 22. Fotocopia de cedula de ciudadanía de Yolanda de Jesús Ortiz Ortiz.
 23. Fotocopia de cedula de ciudadanía de Mónica Fernanda Londoño Ortiz.
 24. Fotocopia de cedula de ciudadanía del extinto Hildebrando Orrego Vélez.
 25. Fotocopia de tarjeta de identidad de la menor Luisa Orrego Ortiz.
 26. Fotocopia de cedula de ciudadanía del extinto Antonio Ortiz Muñoz.
 27. Fotocopia de cedula de ciudadanía de Maria Alejandra Valdez Patiño.
 28. Memorial poder de ARBEY CUELLAR URIBE
 29. Fotocopia cedula de ciudadanía de ARBEY CUELLAR URIBE
 30. Traslado para la Rama judicial
 31. Traslado para la Fiscalía General de la Nación

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca

Celular: 312-2882324

“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

32.Traslado para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

VIII. NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES

LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL
A través del Director Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, ubicado en el Palacio
.....
.
Correo electrónico:
.....

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
A través de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera del Valle Cauca con sede en la ciudad de Cali.....
.....

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Correo electrónico:
Carrera 7 No.75-66 Bogotá, DC, pisos 2 y 3.
Correo electrónico:
conciliaextrajudicial@defensajuridica.gov.co
buzonjudicial@defensajuridica.gov.co

PARTES DEMANDANTES
Por mi intermedio a la carrera 10 No. 7-73, Barrio San Camilo en Popayán, Cauca.

JULIO SOLANO ZAMBRANO.
Carrera 10 No.7-73, Barrio San Camilo de esta ciudad, celular: 312-2882324.
Correo electrónico:
Solano2012zambrano@hotmail.com

Nota.Las notificaciones de
losconvocantes y del suscrito, solicito
se hagan por medio escrito.

Suscribo con mi más alta consideración
Atentamente,

JULIO SOLANO ZAMBRANO
C.C.No.10.526.490 de Popayán.
T.P.No.113155 del .C. S. de la J.

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca
Celular: 312-2882324
“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en procura de Justicia real y efectiva”.

Oficina Cra 10 No. 7-73 Popayán-cauca
Celular: 312-2882324
“El ejercicio del Derecho al servicio de las clases populares en
procura de Justicia real y efectiva”.